

CRISIS POLIÉDRICA EN EL ESTADO ESPAÑOL.

A la grave crisis sanitaria, en el Estado español se suman las crisis económica y social, así como la crisis territorial, ecológica, política y la institucional, derivada por la huida de Juan Carlos I a los Emiratos Árabes Unidos • Las tensiones en el Gobierno de coalición, entre PSOE y Unidas Podemos, son evidentes en un momento en el que la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado es el principal reto del Ejecutivo.



Sato Díaz | @JDSato
Artículo finalizado el 15/09/2020

El 2020 va llegando a su recta final, a partir de ahora cada vez que la Historia se preste a estudiar lo sucedido este año, no podrá sacar ninguna conclusión sin que esta se vea impregnada por la pandemia de covid-19. El coronavirus ha supuesto un terremoto global. Tras medio año desde que en marzo la OMS declarara la pandemia, todavía no somos capaces de atisbar las consecuencias ya no solo sanitarias y humanitarias, sino también económicas, sociales, políticas, ecológicas, filosóficas y culturales para todo el mundo. La covid-19 lo ha manchado todo, y, al menos en el corto plazo, existen visos de que así va a seguir siendo.

En el Estado español, uno de los que porcentualmente más se ha visto afectado por la enfermedad de todo el planeta, ha estallado una bomba que lo ha sumergido en una crisis múltiple de consecuencias gravísimas, y eso que todavía no podemos conocer el alcance de las mismas. La crisis es total y solo nos podemos aproximar a ella desde diferentes perspectivas y una visión multidisciplinar. A las crisis derivadas directamente de la pandemia, tales como la sanitaria, o la económica con motivo de los diferentes confinamientos en distintas gradaciones, los cuales han paralizado buena parte de la actividad económica, y la social, como consecuencia del declive económico, hay que sumar otras crisis que tienen un claro componente propio estructural español y sus peculiaridades.

El coronavirus ha supuesto un terremoto global. Tras medio año desde que en marzo la OMS declarara la pandemia, todavía no somos capaces de atisbar las consecuencias ya no solo sanitarias y humanitarias, sino también económicas, sociales, políticas, ecológicas, filosóficas y culturales para todo el mundo.

En este sentido, durante esta serie de artículos de análisis que venimos publicando a lo largo de este año, hemos hecho referencia a unos cuantos problemas atávicos propios del sistema sociopolítico español. Problemas que se han visto agravados por la coyuntura derivada de la covid-19. Un modelo económico y productivo poco diversificado, con una gran concentración en sectores con poco valor añadido, como son el turismo de masas y su derivado de la hostelería y la construcción, ha hecho que el Estado español haya sido más sensible al desmoronamiento económico internacional de lo que lo han sido países del entorno. Por otro lado, una sociedad especialmente castigada por la crisis surgida tras el crack financiero del 2008, con unas cuotas de desigualdad y unos niveles de pobreza preocupantes en el entorno de la Unión Europea, recibe un nuevo varapalo, las clases sociales más pobres doblemente, y de nuevo, muy afectadas.

En el plano político, la experiencia del primer Gobierno de coalición, conformado por PSOE y Unidas Podemos, ha tenido que adaptar significativamente su hoja de ruta también por la pandemia. En un primer momento, tal y como analizamos en esta serie de artículos, la coalición gubernamental decretó el estado de alarma el 14 de marzo y tomó en un mando único el control total de la pandemia. Las tensiones entre ministerios fueron una constante, percibiéndose en ellas las dos almas en el seno del Consejo de Ministros: la izquierdista de Unidas Podemos y algunos socialistas y algunos sectores del PSOE de talante marcadamente neoliberal. El Gobierno consiguió sacar adelante algunas medidas sociales, el llamado “escudo social”, con profundos debates internos. Algunas de ellas, como el Ingreso Mínimo Vital, que fue vendida como la medida estrella, hasta el momento ha hecho aguas y no está llegando a las familias más empobrecidas. Una tragedia.

El mando único hizo que se concentrara todo el poder en el Gobierno central durante el estado de alarma, lo que llevó a reactivar las tensiones territoriales, crónicas por estas latitudes, en el Congreso. El Gobierno de coalición no se entiende sin la mayoría parlamentaria que facilitó la investidura de enero, en la cual entran partidos nacionalistas periféricos, independentistas y regionalistas. La actitud presidencialista de Pedro Sánchez en los primeros meses de pandemia generó nuevas tensiones en esa mayoría de cariz plurinacional. Tensiones que se acrecentaron más allá del Congreso, en la relación del Gobierno con los ejecutivos de las comunidades autónomas. En un segundo momento de la pandemia, desde mayo y junio, cuando se puso fin al estado de alarma y el proceso de desescalada fue dando protagonismo a las propias comunidades autónomas, se han puesto de manifiesto las carencias en la gestión de algunos de estos gobiernos autonómicos.



Pedro Sánchez asiste a la sesión de control al Gobierno. Septiembre 2020
(Foto: Moncloa)

En definitiva, durante estos meses se ha demostrado que el actual modelo territorial español sigue sin ser lo suficientemente sofisticado para reaccionar desde una realidad nacional plural a situaciones complejas.

En definitiva, durante estos meses se ha demostrado que el actual modelo territorial español sigue sin ser lo suficientemente sofisticado para reaccionar desde una realidad nacional plural a situaciones complejas. No es un estado centralista, tampoco uno federal. Y fuerzas centrípetas y centrífugas colisionan en la siempre presente y conflictiva cuestión territorial. Puede parecer que el coronavirus ha dejado en un segundo lugar la crisis territorial-nacional, pero un breve repaso a los resultados

de las elecciones de julio en Euskadi y Galicia debe servir para entender que sigue abierta. En Euskadi, de 75 escaños en el parlamento, 52 son soberanistas tras los últimos comicios. En Galicia, el BNG, independentista de izquierdas, pasó a ser segunda fuerza y obtuvo 19 diputados, mientras que la legislatura pasada solo tenía 6. En Catalunya, se celebrarán elecciones en los próximos meses. A pesar de las disputas internas entre el independentismo después del ciclo rupturista del 2017, las encuestas dan que las diferentes formaciones independentistas sumarían una nueva mayoría absoluta, incluso más holgada que la actual.



Perfil social de la Plataforma "Pedro Sánchez Dimisión"
(Fuente: Captura Twitter)

neoliberal y centralista, sin perjuicio de alentar actitudes golpistas y de suponer un caldo de cultivo para el crecimiento de la ultraderecha.

Las derechas y ultraderechas se han radicalizado durante estos meses, poniendo en el punto de mira al Gobierno de coalición. PP y Vox, segunda y tercera fuerzas políticas en el Congreso de los Diputados, vieron en la pandemia y en la crisis derivada de la misma el motivo para derrocar al Gobierno, usando a menudo estrategias poco democráticas. Esta actitud de los sectores más derechistas no podría haber tenido lugar de no ser por un sistema mediático, afincado principalmente en Madrid, que ha optado por estrategias comunicativas de carácter trumpista y que pretenden marcar una ofensiva

Una ultraderecha que, en España, no puede separarse de una sociología franquista que todavía perdura en sectores de la sociedad, con especial impregnación en élites económicas, políticas, judiciales y mediáticas de Madrid. En este sentido, es necesario llamar la atención a la persecución y acoso social que están sufriendo dirigentes políticos de izquierdas e independentistas. El caso más llamativo es el del vicepresidente segundo del Gobierno y secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, y la ministra de Igualdad, Irene Montero. En su domicilio particular, en las inmediaciones, se concentran a diario, y desde hace meses, grupos fascistas para insultarles con total impunidad hasta el momento.

Esta crisis poliédrica tiene también su componente institucional, unas instituciones que hace casi una década, cuando estallaba el movimiento 15M, ya quedaban en evidencia. La sociedad gritaba: "No nos representan". La monarquía pasa actualmente por su peor momento desde que asumió la Jefatura del Estado. El rey Juan Carlos I huía de España el pasado mes de agosto perseguido por escándalos judiciales que señalan a supuestos delitos de cobro de comisiones ilegales, fraude a la Hacienda pública o blanqueo de capitales. Tras varios días en paradero desconocido, se publicó que se encuentra acogido por la dictadura de los Emiratos Árabes Unidos.

En definitiva, una crisis moral asola al Estado español y su principal consecuencia puede ser un acrecentamiento de la desafección hacia la política, una tendencia que lleva meses al alza, según el CIS, y que puede generar monstruos que ya conocemos.

La degradación institucional española, además de en la crisis de la monarquía, se ha evidenciado en otro caso en los últimos días. Nuevas revelaciones sobre la policía política supuestamente creada por el exministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, del PP. Un caso que señala directamente al expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy. El uso de agentes de la Policía Nacional para investigar al extesorero del



Luis Bárcenas, extesorero del PP, a su salida de la sede de la Audiencia Nacional en enero del 2017 (Foto: EFE – Emilio Naranjo)

PP, Luis Bárcenas, quien tenía información sobre la financiación ilegal del partido, ha encendido todas las alarmas. Policía política también utilizada para espiar y amedrentar a rivales políticos, tales como el independentismo catalán o a Podemos.

Que el principal partido de la oposición no consiga deshacerse de un halo de corrupción y de instrumentalización de los resortes del Estado profundo para su beneficio particular es un síntoma de la degradación institucional española. Que haya sectores de la Policía que hayan participado en estas prácticas de carácter mafioso aleja a la democracia española del nivel democrático de los países del entorno. Que el partido que lidera la oposición, el PP, siga bloqueando la renovación del Consejo General del Poder Judicial, órgano que nombra a jueces en puestos de relevancia de la judicatura y cuyo mandato caducó unos dos años atrás, es otra evidencia de que la derecha española tiene mecanismos suficientes para evitar perder el poder aunque haya sido derrotada en unas elecciones.

Queda claro cómo el Estado español se dirige hacia un desfiladero del cual no se conoce cuál es la salida posible. Múltiples crisis simultáneas que se reflejan, además, en un estado de ánimo de la sociedad que ve cómo sus referentes, en el mejor de los casos, no cumplen con sus expectativas (como podría ser el caso de clases populares con respecto al Ingreso Mínimo Vital del Gobierno) o cómo, sencillamente, han abusado del Estado y sus instituciones vinculándose con la corrupción (como podría ser el comportamiento de la monarquía y los casos que siguen conociéndose del PP). En definitiva, una crisis moral asola al Estado español y su principal consecuencia puede ser un acrecentamiento de la desafección hacia la política, una tendencia que lleva meses al alza, según el CIS, y que puede generar monstruos que ya conocemos. La dinámica política tiene su propio ritmo

y cada vez parece más aislada de la situación dramática de buena parte de la sociedad. Y todo esto atravesado por la situación sanitaria derivada de la covid-19, la cual sigue agravándose.



Reunión del Comité de Seguimiento del Coronavirus. Lunes 14.09.20 (Foto: Moncloa)

El nivel de contagios vuelve a estar disparado, algunas comunidades autónomas han ejercido dejación de funciones en cuanto a la contratación de rastreadores o el fortalecimiento de la atención primaria sanitaria se refiere. El Gobierno estatal ha pasado la patata caliente a las comunidades y no ha tomado las riendas cuando algunas de

ellas, flagrante es el caso de la Comunidad de Madrid, no han desarrollado sus competencias y obligaciones en la lucha contra la pandemia. Ya es grave la presión sobre la capacidad hospitalaria por el aumento de ingresos con covid-19, también ha crecido considerablemente la presión en las UCI. El personal sanitario llega cansado y cabreado a una nueva ola de la pandemia cuando todavía no se ha recuperado de la de la pasada primavera.

Esta situación continuada de incremento de la epidemia, en la que el derecho a la reunión física está restringido en número de personas y el miedo al contagio sigue imperando, hace que la movilización social se haya convertido en un erial durante los últimos meses. Si a esto sumamos el periodo estival, solo podemos destacar algunas esperanzadoras movilizaciones concretas. Cuando Juan Carlos I se fugó de territorio español, el pasado 3 de agosto, se produjeron algunas concentraciones minoritarias los días posteriores en distintas ciudades del Estado. La llegada de septiembre y el inicio del curso escolar también ha puesto en el foco las reivindicaciones de profesores, estudiantes y demás integrantes de la comunidad educativa organizadas en la Marea Verde y en sindicatos. En distintas comunidades autónomas han organizado huelgas estudiantiles y de docentes. También, como en el caso de Madrid, personal sanitario irá a la huelga en las próximas semanas. Concretamente, trabajadores de la atención primaria.



#HuelgaEducativa18S

(Fuente: perfil Twitter del Sindicato de Estudiantes Aragón @SdE_Aragon)

Tras esta introducción general a la situación de crisis generalizada en la que se encuentra el Estado español, pasamos a analizar de una forma más pausada algunos de sus elementos más relevantes. El Gobierno de coalición se enfrenta en las próximas semanas a un reto principal, conseguir aprobar en el escenario de un Congreso enormemente fragmentado los Presupuestos Generales del Estado. Estos han de servir como pista de aterrizaje a los 140.000 millones de euros del fondo de recuperación europeo, de los que 72.700 millones serán ayudas directas, aprobado en la cumbre europea del pasado 22 de julio. La reconstrucción económica y social es el principal objetivo político en este contexto de crisis poliédrica que hemos descrito. Analicemos y centrémonos en algunos aspectos primordiales.

Crisis de la monarquía

El pasado 18 de marzo, con el estado de alarma y el confinamiento más extremo recién decretados, una gran cacerolada tuvo lugar a lo largo y ancho del Estado. Desde los balcones, parte de la ciudadanía mostró su repulsa a la monarquía y las noticias que cada vez evidencian más la relación de Juan Carlos I, padre del actual jefe del Estado, Felipe VI, con la corrupción. Y es que el día 15, un domingo y un día después de la declaración de estado de alarma, en uno de los momentos más duros de la crisis sanitaria y de la tragedia humanitaria, la Casa del Rey lanzó un comunicado en el que el actual rey renunciaba a la herencia de su padre, a quien, también, le retiraba la asignación económica. Felipe VI sabía desde hacía un año que su padre le había designado como beneficiario de una fundación offshore en Panamá, Lucum, y no hizo nada hasta ese momento trágico para los españoles, cuando quizás podría pasar algo más desapercibido.



Murales del artista J.Warx en las calles del Barrio de Benimaclet, Valencia
(Fuente: perfil red social Instagram @j.warx)

Durante los últimos años, la mayor parte de las noticias relacionadas con la monarquía están vinculadas con líos de faldas o corruptelas, supuestas, vinculadas al mérito. Este verano, también aprovechando que en agosto una buena parte de la ciudadanía desconecta del día a día y que muchos periodistas celebran sus vacaciones, Juan Carlos I daba la espantada y se marchaba de territorio español. El anuncio lo hizo la Casa del Rey el 3 de agosto y hasta el 17 del mismo mes, dos semanas después, no se supo que se encontraba en los Emiratos Árabes Unidos, a resguardo de una dictadura denunciada por organizaciones internacionales por sistemáticas violaciones de los derechos humanos, especialmente de las mujeres. Desde entonces, allí se encuentra gozando de seguridad costeadada por el Estado español. Con dudas sobre si volvería al Estado español si fuera reclamado por la justicia para declarar por los casos sobre los que está siendo investigado, Juan Carlos I ha desaparecido de la vida pública.

Durante los últimos años, la mayor parte de las noticias relacionadas con la monarquía están vinculadas con líos de faldas o corruptelas, supuestas, vinculadas al mérito.

El Tribunal Supremo podría reabrir una causa contra él, su ex amante Corinna Larsen y otras seis personas más por la supuesta comisión de hasta 13 delitos, en una querrela interpuesta por Izquierda Unida y el Partido Comunista de España. Mientras, la causa en Suiza sigue avanzando y es gracias a ella y a las declaraciones de Larsen, así como a las investigaciones periodísticas de medios extranjeros, que en el Estado español vamos conociendo de las supuestas prácticas vergonzantes del Borbón. Unas prácticas que avergüenzan a monárquicos y azuzan a republicanos a poner fin a una monarquía parlamentaria que ha basado en la opacidad y en el cerrojo de los poderes del Estado a su favor su labor durante estas décadas.



Corinna Larsen y el emérito Rey Juan Carlos (Foto: archivo)

Políticamente, estas noticias han supuesto un seísmo, que vienen a agravar una crisis desde la cúspide de la arquitectura institucional española. Partidos con carácter republicano han solicitado en el Congreso una comisión de investigación sobre este asunto sin éxito. El PSOE vuelve a actuar como principal actor para apuntalar el llamado “Régimen del 78” y cierra filas con el PP y la ultraderecha de Vox para paralizar cualquier investigación en sede parlamentaria. El presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Sánchez, enviaba una carta a la militancia socialista en agosto, tras la espantada del Borbón, advirtiendo que no era el momento de poner en duda el pacto constitucional del 1978 que se sustenta, por encima de todas las cosas, en la monarquía parlamentaria. El principal objetivo del PSOE y demás resortes de dicho “Régimen del 78” es separar los casos que vinculan al padre, Juan Carlos I, de Felipe VI. Difícil diferenciación cuando el único motivo por el que Felipe VI es actualmente el jefe del Estado es que es hijo de Juan Carlos I.



Pablo Iglesias, Ada Colau y Alberto Garzón, en un mitin con la bandera republicana (Foto: EFE)

Esto supuso la enésima tensión interna en el Gobierno de coalición. Desde Unidas Podemos, con el vicepresidente Iglesias a la cabeza, no han dudado en tildar de “huida” la fuga del emérito y, tras algunas vacilaciones, se han posicionado a favor de las investigaciones en el Congreso. Unidas Podemos y los partidos que integran esta coalición de izquierdas

son abiertamente republicanos, pero no ven que sea el momento de profundizar en esta crisis, sino de priorizar en mejorar las condiciones sociales de las clases populares en un momento de crisis económica y social.

Aun así, el grupo parlamentario de Unidas Podemos reclama en el Congreso que el CIS (Centro de Investigaciones Sociológicas) estudie cómo se sitúa la opinión pública española sobre este tema, sobre el que lleva varios años sin preguntar. Que IU y el PCE (integrantes de Unidas Podemos) estén en el Gobierno y no azuzando, como tradicionalmente han hecho, la movilización republicana puede ser un motivo más por el que no acaba de cuajar una protesta mayor contra la monarquía. Ahora mismo, hay que destacar la iniciativa de 16 medios de comunicación independientes que, tras recoger en un tiempo récord en un crowdfunding la financiación necesaria, van a realizar la mayor encuesta sobre la monarquía hecha hasta el momento para pulsar a la opinión pública sobre el tema. La directora de la encuesta será, precisamente, la prestigiosa socióloga Belén Barreiro, expresidenta del CIS. Un tema, el de la monarquía, que supone una evidencia de la crisis institucional de la arquitectura del 78. Un elemento más en la crisis poliédrica que asola al Estado español.



Imagen de la Campaña #EncuestaMonarquía de la Plataforma de Medios Independientes

Hacia unos nuevos Presupuestos Generales del Estado

La negociación de los Presupuestos Generales del Estado se presenta, como hemos dicho, como la tarea principal del Gobierno de coalición en las próximas semanas y meses. Es la primera vez que existe un Consejo de Ministros no monocolor, lo que conlleva a que se ponga el foco en las diferencias que existen en él con respecto a las cuentas públicas. Dos proyectos políticos han de converger en la elaboración de los presupuestos para, después, ir a buscar apoyos en un Congreso de los Diputados muy fragmentado. La coalición gubernamental suma 155 diputados, cuando la mayoría absoluta está en los 176.

La importancia de estos presupuestos viene determinada por distintas cuestiones. En primer lugar, el Estado español lleva sin renovarlos, pues los distintos gobiernos no han conseguido los apoyos necesarios, desde el 2018. Están vigentes unos presupuestos elaborados por el entonces ministro de Hacienda del PP, Cristóbal Montoro. Es evidente que son unos presupuestos desfasados, pues no contemplan la situación actual de pandemia y crisis económica y social. Además, tras la aprobación en julio de los fondos de recuperación europeos, las nuevas cuentas públicas deberían servir como pista de aterrizaje de estos fondos, otro motivo para actualizarlos. Políticamente, los Presupuestos Generales del Estado que consiga el Gobierno de coalición tienen una gran relevancia, pues con ellos aprobados, podrían prorrogarlos un par de años más, por lo que se daría la legislatura por salvada para el Gobierno de coalición. Además, son los presupuestos que han de señalar la dirección en la que se reconstruye el país para salir de la actual crisis económica y social. Ahora mismo, los vigentes, vienen determinados por un gobierno conservador, el actual se dice progresista.

Esto ha generado ya distintas polémicas en el seno del Consejo de Ministros. El Gobierno, para buscar la mayoría parlamentaria que apruebe las cuentas puede mirar a su izquierda y a la mayoría de la investidura o a la derecha, a Ciudadanos. El sector económico del Gobierno liderado por el PSOE empezó a negociarlos con Ciudadanos antes, incluso, de cerrarlos con sus socios de gobierno, Unidas Podemos, lo que supuso airadas protestas en las filas izquierdistas. Ahora, negocian unas cuentas conjuntas PSOE y Unidas Podemos para, próximamente, llevarlos al Parlamento.



El presidente del Gobierno Pedro Sánchez saludando al portavoz del Grupo de ERC del Congreso Gabriel Rufián (Foto: Moncloa)

Por parte de Unidas Podemos, quieren aprobarlos con la mayoría de la investidura. En palabras de Iglesias, esta mayoría compondría una nueva “dirección de Estado” que pilotaría el proyecto para el Estado español de los próximos lustros. Así, la participación en la elaboración de estas cuentas y la implicación en esta “dirección de Estado” de partidos como los nacionalistas vascos y los independentistas catalanes, vascos y gallegos supondría dibujar también un horizonte hacia una salida a la crisis territorial desde una perspectiva plurinacional. La celebración de elecciones catalanas en los próximos meses hace que se complique el apoyo de ERC en esta votación, pues en las disputas internas del independentismo podrían dar una imagen de excesiva proximidad al Estado. La disyuntiva a la que se enfrenta ERC puede ser crucial en el baile político español de los próximos tiempos: posibilismo o rupturismo.

... el Estado español lleva sin renovar sus presupuestos desde el 2018. Es evidente que son unos presupuestos desfasados, pues no contemplan la situación actual de pandemia y crisis económica y social.

Cabe destacar que, en el acuerdo para la investidura, ERC se abstuvo facilitando que Sánchez llegara al Palacio de la Moncloa con un acuerdo en el que se propiciaba una mesa de diálogo bilateral entre el Gobierno del Estado y el Govern de la Generalitat de Catalunya con el objetivo de buscar una solución política al contencioso catalán. Los dos presidentes, Sánchez y Joaquim Torra, se reunieron en Barcelona el pasado 6 de febrero. Después, cuando estalló la pandemia, no volvieron a hacerlo. El pasado 3 de septiembre, el presidente del Gobierno recibía al portavoz parlamentario de ERC, Gabriel Rufián, quien le sonsacó el compromiso de que ambos gobiernos volverían a la mesa de diálogo en los próximos días. ERC, que es la fuerza más votada de Catalunya, ha hecho del diálogo con el Estado una de sus principales banderas políticas. Podría ser que, si prima la actitud dialogante del Gobierno de España, ERC se decida por facilitar que los presupuestos salgan adelante en el Congreso e iniciar una nueva etapa en las relaciones de Catalunya con el resto del Estado.



Pedro Sánchez recibió a la presidenta de Ciudadanos Inés Arrimadas el 02.09.20
(Foto: Moncloa)

La otra alternativa, la preferida de algunos sectores del PSOE, es llegar a un acuerdo con Ciudadanos. El partido que, desde que lo lidera Inés Arrimadas, ha intentado un acercamiento al PSOE en algunos temas para separarse de la foto del trío reaccionario que conformaba junto a PP y Vox. Esta operación de acercamiento entre PSOE y Ciudadanos, formación integrada en la familia liberal europea pero que tiene un fuerte componente nacionalista español, podría ser más amplia. Ciudadanos gobierna

con el PP y el apoyo externo de Vox en tres comunidades autónomas, Madrid, Andalucía y Murcia, y muchos ayuntamientos. El PSOE fue la fuerza más votada en esas tres regiones. Si Ciudadanos cambiara las alianzas, podría crearse un bloque PSOE-Ciudadanos extendido en distintos territorios. De momento, el PSOE ha ofrecido a Ciudadanos la presidencia de la Comunidad de Madrid si apoya una moción de censura a Isabel Díaz Ayuso, la actual presidenta del PP, cuyo vicepresidente es de Ciudadanos.

Por todos estos motivos, en los Presupuestos Generales del Estado hay algo más en juego que unas cuentas públicas anuales. El PSOE, en el que siempre existe una tendencia a mirar a la derecha, tiene el contrapeso de Unidas Podemos a quien necesita para gobernar en el Estado con la actual correlación de fuerzas. Y, en definitiva, lo que señalarán estos presupuestos será un horizonte de políticas económicas expansivas o la vuelta, como hace unos años, a escoger la senda neoliberal para afrontar una nueva crisis económica.

Otras disputas en el Gobierno de coalición

Tal y como hemos venido describiendo en los artículos de esta serie, desde que en enero tomara posesión el Gobierno de coalición, han quedado manifiestas las diferencias entre sus componentes de PSOE, por un lado, y Unidas Podemos. También, entre los ministros del PSOE ha habido discrepancias entre algunos sectores más tendentes a la socialdemocracia y otros, con la vicepresidenta económica Nadia Calviño a la cabeza, al neoliberalismo. Estas diferencias se han ido solucionando en reuniones personales que Sánchez e Iglesias, como líderes de las dos patas de la coalición, han ido celebrando. De tal manera que, comunicativamente, consiguen apelar a distintos sectores de la sociedad, un espectro que va desde la izquierda alternativa a un social liberalismo, y, a pesar de una primera imagen de desunión, luego el Ejecutivo actúa como un todo.

Si estas peleas internas llamaron la atención durante el estado de alarma por las medidas que se fueron implementando del “escudo social”, en las últimas semanas se han mantenido. Más allá del con quién se buscan los acuerdos parlamentarios que den sustento a una mayoría parlamentaria para sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado, ora Ciudadanos ora ERC, ha habido cuestiones de importancia a las que hacemos referencia. Estas son, entre otras, la reforma laboral, la gran fusión bancaria, la congelación de sueldos de los funcionarios, la próxima subida del Salario Mínimo Interprofesional o alargar la edad de jubilación.

“El Gobierno no es tan de izquierdas, le falta voluntad política contra la reforma laboral” (Pepe Álvarez, secretario general de UGT)



Pepe Álvarez en una sala de reunión de la UGT de Euskadi (Foto: elnortedecastilla.es)

presionan. Es el caso de la UGT, afín históricamente al PSOE, cuyo secretario general, Pepe Álvarez, en una reciente entrevista aseguraba que “el Gobierno no es tan de izquierdas, le falta voluntad política contra la reforma laboral”.

Los sectores económicos vinculados al PSOE en el Gobierno no creen que sea el momento para abrir este melón, mientras que desde Unidas Podemos ya tiran de la cuerda, de nuevo, en este sentido. El portavoz parlamentario y secretario general del PCE, Enrique Santiago, el pasado 13 de septiembre alentaba en redes sociales: “Llega el momento de dismantelar la reforma laboral del Gobierno Rajoy”. Y se ponía como metas “reconocer el alcance de convenios, reconocer la relación laboral a falsos autónomos y acabar con la precariedad”. Además, Santiago alertaba: “Enfrentaremos muchos obstáculos para alcanzar el objetivo”. Así será, puede ser uno de los platos fuertes de las discrepancias venideras entre los socios de gobierno.

Otro de los temas más relevantes de los últimos días ha sido el anuncio de fusión bancaria entre dos de los grandes bancos españoles: CaixaBank y Bankia. Mientras que los medios de comunicación afines al PSOE y los dirigentes socialistas aplaudieron el anuncio, también desde las derechas, desde las filas de las izquierdas quedaron ojipláticos en un primer momento, para después reaccionar y situarse en contra de esta concentración financiera. Cabe



Montaje de logos Bankia y CaixaBank (Foto: eldebatadedehoy.es)

recordar que Bankia, que ya fue una fusión bancaria de Caja Madrid y Bancaja (valenciana) entre otras entidades, fue rescatada con dinero público como consecuencia de la pasada crisis financiera. Desde algunos sectores de la izquierda se pretendía que, puesto que la entidad se salvó con dinero público, se convirtiera en la banca pública que no existe en el Estado español, contrariamente a lo que sucede en otros países del entorno europeo.

La nueva fusión, que está bastante avanzada y todo hace pensar que quedará cerrada en los próximos días, supondría que las tres entidades más grandes del país, que son Santander, BBVA y Caixa+Bankia, acumulen casi el 61% de los activos del sector, un monstruo oligopólico de difícil manejo desde lo público y que conllevaría perjuicios para los clientes, que perderían oferta en un mercado, el financiero, ya muy concentrado en pocas manos. Además, según señalan algunos economistas, la absorción conllevaría cierre de sucursales bancarias, con sus consecuentes despidos o prejubilaciones. El cierre de sucursales en pueblos pequeños, en el mundo rural, puede ser causa de que empresas y pymes se desplacen a localidades más grandes, donde haya servicios bancarios, y esto profundizaría en la despoblación del campo. Una de las mayores brechas actuales del Estado español se da entre el rural y el urbano, existiendo una vasta superficie de territorio con una nimia densidad de población y escasez de servicios, la España vaciada. Por cierto, desde las elecciones del pasado mes de noviembre, la España vaciada tiene representación en el Congreso con un diputado de la formación Teruel Existe, reflejando parlamentariamente uno de los principales problemas actuales que profundiza, desde otra perspectiva, en la crisis territorial.

La nueva fusión, (...) supondría que las tres entidades más grandes del país, que son Santander, BBVA y Caixa+Bankia, acumulen casi el 61% de los activos del sector, un monstruo oligopólico de difícil manejo desde lo público y que conllevaría perjuicios para los clientes, que perderían oferta en un mercado, el financiero, ya muy concentrado en pocas manos.

El pasado 10 de septiembre nos levantábamos con un intrigante titular del diario *El País*: “El Gobierno se plantea congelar el sueldo de los funcionarios en 2021”. Un globo sonda, tal vez, sobre el que pronto tuvieron que manifestarse distintos ministros. Así, desde Unidas Podemos niegan la mayor. El ministro de Consumo, el economista y coordinador federal de IU, Alberto Garzón, calificaba la medida de “grave error”. La vicepresidenta primera, la socialista Carmen Calvo, también lo negaba. Mientras, la vicepresidenta económica, Calviño, y la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, no negaban la posibilidad y el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, iba más allá y lo veía “lógico”. Otra batalla en el seno del Ejecutivo para apuntar en la agenda de los próximos meses.



Manifestación de jubilados frente al Congreso para exigir pensiones dignas en Octubre 2019 (Foto: rtve.es)

El propio responsable ministerial de Seguridad Social anunciaba en una entrevista reciente que el Gobierno baraja la posibilidad de facilitar retrasar la edad de jubilación. Sería mediante bonificaciones a los trabajadores que aguantaran más tiempo trabajando de lo estipulado, entre los 65 y 67 años, y penalizando las prejubilaciones.

Además, lanzaba la idea de reformular el sistema de pensiones, abriendo la puerta a los planes de pensiones privados. Claro, en Unidas Podemos, otra vez, a la defensiva contra las ideas fomentadas desde la propia coalición gubernamental. El PCE, por ejemplo, que tiene dos ministros militantes en el Gobierno, Garzón y la titular de trabajo Yolanda Díaz, ha reaccionado con un comunicado afeando las declaraciones de Escrivá, posicionándose a favor de garantizar un sistema de pensiones con un “régimen fiscal justo” y recordándole que, en el acuerdo de gobierno, tanto PSOE como Unidas Podemos se comprometían a la revalorización de las pensiones conforme a las variaciones del IPC anual.

La última disputa viene dada por los rumores que corren en determinadas cabeceras de que el Gobierno se plantea no subir el Salario Mínimo Interprofesional el próximo año. Por supuesto, en Unidas Podemos niegan tal posibilidad, pues esta ha sido una de sus banderas en campañas electorales. En definitiva, en el seno del Gobierno de coalición se evidencia una disputa ideológica ante cómo afrontar una nueva crisis económica y social, que, como vemos en el Estado español tiene muchas más derivadas (política, institucional, territorial...).

El PSOE mantiene una constante inercia hacia la ortodoxia neoliberal y a contentar a sectores de poder del Estado que tienen una concepción uninacional del Estado. Unidas Podemos intenta contrarrestar esta tendencia del partido alfa del Gobierno, consciente de tener que “tragarse sapos” en ocasiones para poder influir en otras políticas sociales en otros momentos.

El PSOE mantiene una constante inercia hacia la ortodoxia neoliberal y a contentar a sectores de poder del Estado que tienen una concepción uninacional del Estado. Unidas Podemos intenta contrarrestar esta tendencia del partido alfa del Gobierno, consciente de tener que “tragarse sapos” en ocasiones para poder influir en otras políticas sociales en otros momentos. Sin embargo, tal y como se vio en las elecciones de julio en Euskadi y Galicia, el apoyo electoral a la coalición liderada por Iglesias ha bajado estrepitosamente. En Galicia pasaron de ser segunda fuerza política a perder toda representación en el parlamento. En Euskadi, también sumaron otra derrota electoral. La credibilidad de Unidas Podemos está en juego, y en cómo consiga influir en el Gobierno de coalición para sacar adelante medidas sociales se la juega. En los próximos Presupuestos Generales del Estado esto también está en juego, el futuro de las izquierdas.